

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, nueve (9) de octubre de dos mil veinte (2020)

Auto Interlocutorio No. 137

MAGISTRADO PONENTE: OSCAR SILVIO NARVÁEZ DAZA

MEDIO DE CONTROL:	Repetición
EXPEDIENTE:	76001-33-37-000-2019-01107-00
DEMANDANTE:	Instituto Colombiano de Ballet Clásico – INCOLBALLET direccionadministrativa@incolballet.com asesorjuridico@incolballet.com alvarobravo01@gmail.com
DEMANDADO:	Gloria Castro Martínez y otros
DECISIÓN:	Rechaza demanda por caducidad

OBJETO DE LA DECISIÓN

Encontrándose a despacho del suscrito magistrado ponente para proveer sobre la admisión de la presente demanda de repetición, se observa que la misma debe ser rechazada por caducidad de la acción, tal como se analizará a continuación.

I. ANTECEDENTES

El Instituto Colombiano de Ballet Clásico – INCOLBALLET a través de apoderado judicial, mediante el ejercicio del medio de control de repetición consagrado en el artículo 142 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA, en lo sucesivo) pidió declarar la responsabilidad patrimonial de:

- La señora Gloria Castro Martínez por el detrimento patrimonial sufrido en razón de la condena impuesta por la sentencia No. 004 de enero 16 de 2012, proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión de Cali y confirmada en sentencia No. 195 de junio 27 de 2013 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
- De las señoras Gloria Castro Martínez y Edid Consuelo Bravo Pérez, y el señor Jorge Enrique Vivas Muñoz, por el detrimento patrimonial ocasionado a raíz del no cumplimiento total de la condena establecida a través de la sentencia No. 004 de enero 16 de 2012, confirmada en la sentencia No. 195 de junio 27 de 2013 dentro del proceso con radicado 76001-23-31-000-2005-05378-00; que originaron el pago de excedentes de salario, prestaciones sociales, indexación e intereses dentro del proceso ejecutivo con radicado 76001-33-33-010-2015-00054-00 adelantado ante el Juzgado Décimo Administrativo de Cali.

Como consecuencia de lo anterior, pidió¹ condenar a los demandados a pagar la suma de \$780.798.751 a favor de INCOLBALLET, suma de dinero que el Instituto pagó en cumplimiento de sentencias judiciales y que culminó con el proceso ejecutivo; condena que deberá liquidarse con base en el IPC; condena en costas y agencias en derecho.

¹ Ver folios 1 – 2 cuaderno 1.



Radicación : 2019-01107-00
Medio de control : REPETICION
Demandante : INCOLBALLET
Demandado : GLORIA CASTRO MARTINEZ y OTROS

2

II. CONSIDERACIONES

La figura de la caducidad ha sido entendida como el fenómeno jurídico procesal a través del cual el legislador limita en el tiempo el derecho de acción que tiene toda persona para acceder a la jurisdicción y que halla su fundamento precisamente en la necesidad del conglomerado social de obtener seguridad jurídica y con ello evitar la paralización del tráfico jurídico.

En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que, por el contrario, está encaminada a la protección de un interés general.

La caducidad es uno de los llamados presupuestos procesales del medio de control, esto es, uno de aquellos requisitos que se deben acreditar, ab initio, para que se pueda instaurar la demanda.

Dichas exigencias, por regla general deben ser verificadas en la primera etapa del proceso, es decir, en el momento del estudio para la admisión en la medida en que se debe propender por un control temprano del proceso.

Así pues, la caducidad impide el ejercicio de la acción y en razón de ello, cuando se ha configurado no puede iniciarse válidamente el proceso, pudiendo inclusive ser declarada oficiosamente cuando se verifiquen los hechos en que se funda.

Respecto de la caducidad del medio de control de repetición, ha señalado el Consejo de Estado²:

“De conformidad con el literal L del numeral 2° del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el término de caducidad para la pretensión de la demanda de repetición empieza a correr a partir de la fecha en la que efectivamente se realice el pago cuyo reintegro se pretende o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 10 meses previstos en el artículo 192 ibídem³.

Al respecto, conviene precisar que la Subsección ha dejado claro que el plazo para pagar con que cuenta la entidad pública deberá computarse con arreglo a la antigua codificación -18 meses, artículo 177- si el proceso que le da base a la repetición se tramitó bajo ese régimen jurídico y se ordenó sufragar la condena en esos términos⁴.

Así, la Sala debe poner de presente que la condena objeto del sub examine se profirió dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que inició su trámite en vigencia del Código Contencioso Administrativo –Decreto 01 de 1984-. De igual manera, la Nación-Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural- debía cumplirla en los términos de los artículos 177 y 178 de ese mismo cuerpo normativo.” (Subraya la Sala)

Y en fallo de septiembre 12 de 2016⁵, ratificó su posición frente a la caducidad así:

² C. de E. Sección Tercera - Subsección A. CP: Dra. María Adriana Marín. Sentencia de febrero 20 de 2020. Radicación: 11001-03-26-000-2017-00052-00(59153)

³ *“Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o devolución de una suma de dinero serán cumplidas en un plazo máximo de diez (10) meses, contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia. Para tal efecto, el beneficiario deberá presentar la solicitud de pago correspondiente a la entidad obligada”.*

⁴ C. de E. Sección Tercera, Subsección A, auto de abril 5 de 2017, expediente 58762, M.P.: CP: Dr. Hernán Andrade Rincón.

⁵ C. de E. Sección Tercera - Subsección C. CP: Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Septiembre 12 de 2016. Radicación: 54001-23-31-000-2000-00445-01(52703).



Radicación : 2019-01107-00
Medio de control : REPETICION
Demandante : INCOLBALLET
Demandado : GLORIA CASTRO MARTINEZ y OTROS

3

“Es decir, en tratándose del ejercicio oportuno de la acción de repetición cabe precisar que la caducidad se produce al cabo de los dos años contados a partir del día siguiente al del pago total, pero siempre y cuando que ese pago sea oportuno, es decir dentro del plazo previsto en el acto o en la sentencia que lo imponga, o, en últimas, dentro de los 18 meses previstos en el artículo 177 del C. C. A., pues si ese pago total se hace con posterioridad, el término de caducidad empezará a correr indefectiblemente a partir del vencimiento del indicado en el acto o en la sentencia, o, a más tardar, al vencimiento de los 18 meses antes mencionados”⁶.

Y cuando se trata de un pago hecho por cuotas o instalamentos, si la cancelación de todas estas no se ha hecho en las oportunidades antes señaladas, el término de caducidad empezará a contarse de todas maneras una vez concluyan los plazos previstos para el pago en el acto o en la sentencia, o, en últimas, al vencimiento del término previsto en el artículo 177 del C.C.A. En síntesis, si el pago total no se ha hecho dentro de los plazos antes indicados, la caducidad empieza a correr ineludiblemente a partir del vencimiento de estos.

La posición de la Sección Tercera del Consejo de Estado en innumerables providencias respecto de los requisitos para que proceda la acción de repetición⁷, indica entre otras, que la entidad debe acreditar el pago efectivo que hubiere realizado respecto de la suma dineraria que le hubiere sido impuesta por una condena judicial⁸. Por tal razón no le es dable a la entidad el hecho de que quede a su discreción determinar el término de caducidad de la acción, cuando aquella está determinada en la ley.

La Corte Constitucional en sentencia C-832 del 8 de agosto de 2001 expresó al respecto que:

“(…) el plazo con que cuenta la entidad para realizar el pago de las sentencias de condena en su contra, no es indeterminado, y por lo tanto, el funcionario presuntamente responsable, objeto de la acción de repetición, no tendrá que esperar años para poder ejercer su derecho de defensa.

Si esta fecha no fuera determinada, se estaría vulnerando el derecho al debido proceso, ya que esto implicaría una prerrogativa desproporcionada para la Administración, y las prerrogativas deben ser proporcionadas con la finalidad que persiguen.

(…) De acuerdo a lo señalado en el punto 4.1, si la entidad condenada, incumpliendo la normatividad anotada, desborda los límites de tiempo señalado para el pago de las citadas condenas, ello no puede afectar el derecho al debido proceso del servidor presuntamente responsable, razón por la cual, la norma será declarada exequible bajo el entendido de que el término de caducidad de la acción empieza a correr, a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago, o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 inciso 4 del Código Contencioso Administrativo”. (Subrayas por fuera del texto original).

Así las cosas, se observa que en el caso sub examine se debe aplicar, para la contabilización del término de la caducidad de la acción de repetición, la regla contenida en el artículo 177 inciso 4 del C. C. A., según el cual el vencimiento del plazo de 18 meses es desde el día siguiente al previsto para que la entidad pública cumpla la obligación indemnizatoria que le ha sido impuesta.” (Subraya la Sala)⁹

⁶ Reiteración sentencia del 26 de febrero de 2014, expediente 48.214.

⁷ De acuerdo con la posición de la Sección Tercera los requisitos que debe acreditar la entidad demandante son los siguientes: i) La calidad de agente del Estado y su conducta determinante en la condena; ii) La existencia de una condena judicial, una conciliación, una transacción o de cualquier otra forma de terminación de conflictos que genere la obligación de pagar una suma de dinero a cargo del Estado; iii) El pago efectivo realizado por el Estado; iv) La cualificación de la conducta del agente determinante del daño reparado por el Estado, como dolosa o gravemente culposa.

⁸ Sentencia de 27 de noviembre de 2006, expediente: 22099; 6 de diciembre de 2006, expediente: 22056; 3 de octubre de 2007, expediente: 24844; 26 de febrero de 2009, expediente: 30329; 13 de mayo de 2009, expediente: 25694; 28 de abril de 2011, expediente: 33407; 9 de mayo de 2010, expedientes: 26044 y 30328; entre otras.

⁹ La sentencia C-832 de 2001, MP. Dr. Rodrigo Escobar Gil, declaró EXEQUIBLE la expresión “*contados a partir del día siguiente de la fecha del pago total efectuado por la entidad*”, contenida en el numeral 9º del artículo 136 del CCA, bajo el entendido que el término de caducidad de la acción empieza a correr a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago, o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 inciso 4 del mismo código.



Radicación : 2019-01107-00
Medio de control : REPETICION
Demandante : INCOLBALLET
Demandado : GLORIA CASTRO MARTINEZ y OTROS

4

Teniendo en cuenta lo establecido por el Consejo de Estado, y que las sentencias Nos. 004 de enero 16 de 2012 del Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión de Cali y 195 de junio 27 de 2013 del Tribunal Administrativo del Valle, se expidieron bajo las reglas procesales del anterior Código Contencioso Administrativo (CCA – Decreto 01 de 1984), el plazo para cumplirlas por la entidad pública deberá computarse con arreglo al artículo 177 del mismo ordenamiento, referente a 18 meses y no a partir del último pago efectuado por el INCOLBALLET, pues como lo ha sostenido la Corte Constitucional, el plazo con que cuenta la entidad para hacer el pago de las sentencias condenatorias, no es indeterminado y por lo tanto, el funcionario presuntamente responsable, sujeto pasivo de la acción de repetición, no tendrá que esperar años para ejercer su defensa y tampoco que la entidad acreedora pudiera caprichosamente ampliar el término de caducidad, solamente retardando el pago de la condena.

Así, la Sala debe poner de presente que la condena, objeto del *sub examine*, se profirió dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que inició su trámite en vigencia del CCA. De igual manera, INCOLBALLET debía dar cumplimiento en el término de 18 meses a la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia, en los términos de los artículos 177 y 178 de ese mismo cuerpo normativo¹⁰.

Se tiene que la sentencia de segunda instancia No. 195 de junio 27 de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, quedo ejecutoriada el 1º de agosto de 2013¹¹. INCOLBALLET tenía 18 meses para darle cumplimiento, esto es desde el 2 de agosto de 2013 hasta el 2 de febrero de 2015; sin embargo, la entidad efectuó el pago por fuera del término estipulado, haciendo 5 pagos así: \$150.000.000 el 31 de diciembre de 2014¹², \$73.203.832 el 30 de diciembre de 2015¹³, \$247.181.762 el 18 de junio de 2019¹⁴, \$254.913.834 el 16 de agosto de 2019¹⁵ y la suma de \$55.499.323 el 23 de agosto de 2019¹⁶.

Teniendo en cuenta, que la entidad efectuó la totalidad del pago de la sentencia por fuera de los 18 meses estipulados en el artículo 177 del CCA, el término de dos (2) años para interponer la demanda de repetición empezó a correr el día siguiente a la fecha límite que tenía la entidad para dar cumplimiento a la sentencia, es decir el 3 de febrero de 2015 y hasta el 3 de febrero de 2017.

Así, la parte actora tenía hasta el **3 de febrero de 2017** para interponer la demanda, y conforme con el acta de reparto¹⁷, al momento de ser radicada **3 de diciembre de 2019**, momento para el cual ya habían pasado 2 años y 10 meses, en consecuencia, había operado el fenómeno jurídico de la caducidad del medio de control de repetición.

¹⁰ La sentencia de primera instancia No. 004 de enero 16 de 2012 proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión del Circuito de Cali dispuso en su resolutive: "...*QUINTO: DAR aplicación a los artículos 176 y 177 del C.C.A.*" y la sentencia de segunda instancia No. 195 de junio 27 de 2013 de la Sala Jurisdiccional de Descongestión Laboral del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a su vez resolvió: "*PRIMERO.- CONFÍRMASE la sentencia No. 004 de 16 de enero de 2012 proferida por el JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DE DESCONGESTIÓN DEL CIRCUITO DE CALI.*". Luego el cumplimiento de dichos proveídos debía hacerse de conformidad con el artículo 177 del CCA, tal y como fue ordenado.

¹¹ Ver folio 128 cuaderno 1

¹² Ver folio 208 cuaderno 2

¹³ Ver folio 210 cuaderno 2

¹⁴ Ver folio 237 cuaderno 2

¹⁵ Ver folio 240 cuaderno 2

¹⁶ Ver folio 239 cuaderno 2

¹⁷ Ver folio 334 cuaderno 2

Radicación : 2019-01107-00
Medio de control : REPETICION
Demandante : INCOLBALLET
Demandado : GLORIA CASTRO MARTINEZ y OTROS



5

Concluye la Sala que de conformidad con el numeral 1º del artículo 169¹⁸ del CPACA procede el rechazo de la demanda, en razón a que operó la caducidad, tal y como se explicó en líneas anteriores.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, este Tribunal en Sala de Decisión,

RESUELVE

PRIMERO: RECHAZAR la demanda presentada a través de apoderado judicial por el Instituto Colombiano de Ballet Clásico - INCOLBALLET en contra de Gloria Castro Martínez, Edid Consuelo Bravo Pérez y Jorge Enrique Vivas Muñoz.

SEGUNDO: RECONOCER personería para actuar como apoderado de la parte actora al abogado Álvaro José Bravo Cruz, con cédula de ciudadanía No. 14.639.563 y portador de la tarjeta profesional No. 294.235 del Consejo Superior de la Judicatura, en los términos y para los efectos a que alude el memorial poder presentado¹⁹.

TERCERO: ORDENAR el desglose de los documentos acompañados con la demanda para que sean devueltos a la parte interesada y archívese lo actuado, previas anotaciones en el sistema informático “Justicia Siglo XXI”.

Proyecto discutido y aprobado en Sala de Decisión de la fecha. (Acta No. ____).

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Los Magistrados,

OSCAR SILVIO NARVÁEZ DAZA

OMAR EDGAR BORJA SOTO
EDUARDO ANTONIO LUBO BARROS

¹⁸ **Artículo 169. Rechazo de la demanda.** Se rechazará la demanda y se ordenará la devolución de los anexos en los siguientes casos: 1. Cuando hubiere operado la caducidad. (...)”

¹⁹ Ver folio 22 cuaderno 1.